

DESERCIÓN: LA UNIÓN EUROPEA EN LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS¹

Wolfgang Streeck

Director emérito del Max Planck Institute for the Study of Societies

La Unión Europea no estaba preparada para el SARS-CoV-2 —también conocido como coronavirus—, ni sus instituciones centrales ni sus Estados miembros. Desde ambas instancias se ha abordado la pandemia como un asunto europeo ordinario, que debía gestionarse mediante la política europea habitual. Casi instintivamente, la Comisión y el Parlamento europeos han visto en la pandemia una oportunidad para acaparar poder, es decir, para ampliar su jurisdicción sobre los Estados miembros. Estos últimos, a su vez, han seguido con su viejo juego de echar balones fuera y de evitar que se les imputasen responsabilidades: ya sea transfiriendo responsabilidades hacia instancias superiores ante situaciones que consideran de difícil gestión o bien creando mandatos europeos para atribuirse a sí mismos funciones que sus electorados nacionales nunca les hubieran concedido. Ninguno de estos actores se ha preocupado por las verdaderas cuestiones de fondo o al menos todos han evitado escrupulosamente hablar de ellas en público: ¿de dónde viene este nuevo virus? ¿Surge de modo totalmente inesperado de la naturaleza o bien procede de la actividad humana? ¿Se trata de un acontecimiento único o de un episodio de una serie que está por llegar? ¿Cómo evitar que se repita algo así, fortaleciendo la «resiliencia» de las sociedades europeas o luchando contra los futuros nuevos virus en su origen, sea este cual fuere?

En cualquier caso, no resulta en absoluto sorprendente que las respuestas inmediatas organizadas —o desorganizadas— por Europa ante la pandemia hayan dejado tanto que desear. En términos operativos,

(...) la Comisión y el Parlamento europeos han visto en la pandemia una oportunidad para acaparar poder, es decir, para ampliar su jurisdicción sobre los Estados miembros. Estos últimos, a su vez, han seguido con su viejo juego de echar balones fuera y de evitar que se les imputasen responsabilidades...

es decir, de elaboración e implementación de las correspondientes políticas públicas, la UE ha sido y sigue siendo muy disfuncional, si bien no deja de reclamar machaconamente «soluciones europeas». Pero, aunque a muchos Gobiernos europeos les hubiera encantado «europeizar el virus» transfiriendo así sus responsabilidades a Bruselas, en última instancia sus electorados nunca les hubieran permitido librarse de la patata caliente de un problema potencialmente intratable y políticamente explosivo. Incluso prescindiendo de la ausencia de todo debate público sobre el deplorable papel histórico de la UE en cuanto a salud pública europea, la ciudadanía ha tenido muy claro que sus Gobiernos electos tenían que asumir sus responsabilidades en una cuestión que se le había dicho que era de vida o muerte. Habida cuenta de las importantes diferencias nacionales existentes tanto en cuanto a las manifestaciones de la CO-

VID-19 como en lo referido al funcionamiento de los diversos sistemas sanitarios, parece más que razonable que las poblaciones demanden políticas a escala nacional más que supranacional, políticas que además puedan debatir públicamente en su propio idioma con la esperanza de poder influir en las mismas. De hecho, lo extraño hubiera sido lo contrario: que la ciudadanía de los países europeos permitiera que esta pandemia fuera gestionada por una tecnoburocracia centralizada y lejana, cuyos representantes parecen más entusiasmados por «una unión cada vez más estrecha de los pueblos europeos» que por la salud de los mismos o que, en cualquier caso, solo parecen interesarse por la segunda en la medida en que esto pueda promover la primera.

Como suele ocurrir, las preferencias populares han resultado ser las opciones más realistas. Incluso un año y medio después, sigue sin encontrarse un patrón uniforme de propagación de la infección común a la

1. Traducción de Eric Jalain, de AEIOU traductores. Revisión de Carlos Prieto.

totalidad de los países europeos. Las oleadas de contagios varían en intensidad y duración de un país a otro, de una región a otra, sin que todavía seamos capaces de comprender exactamente la razón de ello, lo que ha obligado, a falta de soluciones mejores, a recurrir a respuestas improvisadas y locales en vez de a medidas centralizadas uniformes y prefijadas. Evidentemente, las sociedades europeas aún son demasiado diferentes como para aplicarles tratamientos absolutamente uniformes. Las condiciones climáticas varían, así como las estructuras demográficas, la situación sanitaria general de las poblaciones, la calidad local del aire, los modelos familiares y los hábitos de vida en general, especialmente los de los llamados «grupos de riesgo», así como varían también las tradiciones religiosas y culturales relacionadas con la salud y el cuerpo humano. Otro factor que también parece relevante es hasta qué punto la población confía en su respectivo gobierno, lo que podría explicar algunas de las disparidades más significativas en las tasas nacionales de vacunación, por ejemplo, entre Alemania y Dinamarca. Por otro lado, cada sociedad nacional presenta diferentes «valores», que alumbran diferentes prioridades políticas; véase por ejemplo el caso de Suecia, que ha mantenido sus centros educativos abiertos durante toda la pandemia, a diferencia de Alemania, donde la política educativa ha estado condicionada por un profesorado lleno de desconfianza, primero por temor a contagiarse y después por sus reticencias a vacunarse. Y, por último, pero no por ello menos importante, las diferencias entre los modelos económicos nacionales también han influido, y así aquellos países cuya prosperidad depende en gran medida del turismo internacional han necesitado mantener sus fronteras lo más abiertas posible, mientras que los países de origen de dicho turismo han preferido cerrarlas para evitar viajes e importación de contagios por parte de sus ciudadanos.

En cuanto a la UE, cuando irrumpió la pandemia mantuvo durante algún tiempo activa una institución denominada Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (CEPCE), cuya sede se halla en Estocolmo. Este Centro está dotado con una plantilla de 280 personas a tiempo completo y cuenta con un presupuesto anual de 57 millones de euros. En general, prácticamente nadie ha oído hablar del mismo, salvo los virólogos y epidemiólogos del mundo entero, que lo conocen porque ha sido sede de innumerables conferencias internacionales. Más allá del escaso conocimiento que tenemos de este Centro, lo cierto es que desde luego no ha ayudado en gran cosa a que la UE y sus Estados miembros

se preparen para algo como la COVID-19, por ejemplo, instando a los países europeos a hacer acopio de mascarillas, equipos de protección y ventiladores; recomendándoles que cuenten con suficiente personal formado de reserva; ofreciéndoles cursos de formación para el personal sanitario público nacional y para las agencias reguladoras de la higiene hospitalaria y de la prevención de enfermedades en residencias de la tercera edad; organizando simulaciones para los responsables políticos de los Estados miembros sobre qué hacer y cómo cooperar en una posible pandemia de dimensiones europeas; o advirtiendo genéricamente a los ciudadanos europeos de que sus estilos de vida globales pueden resultar mortales a no ser que sus sistemas sanitarios se hallen preparados para enfrentarse a sus consecuencias.

Es muy probable que una de las razones por las que no se han lanzado semejantes advertencias haya sido que estas hubieran entrado en conflicto con las duras recomendaciones emitidas anualmente en el marco de las diversas medidas de austeridad y de coordinación fiscal exigidas por el vigente régimen europeo de ortodoxia monetaria con el fin de recortar gasto público y reducir así los déficits públicos y la deuda pública de los diversos países europeos. Entre los gastos objeto de recorte se hallan los sistemas sanitarios públicos. Entre 2011 y 2018, la Comisión Europea emitió sesenta y tres peticiones formales a los Estados miembros para que recortaran sus gastos sanitarios públicos y privatizaran sus sistemas de salud. Cuando irrumpió la pandemia, la austeridad impuesta en los países económicamente más deficitarios de la UE había rebajado el gasto en sanidad al 8,8 por 100 del PIB en el caso de Italia y al 8,9 por 100 en el caso de España. De estos porcentajes, solo el 6,5 por 100 y el 6,3 por 100, respectivamente, correspondían a gasto público, pues el resto estaba cubierto por el copago y a través de sistemas de seguros sanitarios privados voluntarios. Comparativamente, Alemania mantenía un gasto sanitario del 11,2 por 100 de su PIB, del cual el 9,5 por 100 correspondía a gasto público. Para contextualizar estos datos, el 3 por 100 del PIB —la diferencia entre el gasto público sanitario en Italia y Alemania— supone más de 2,3 veces el presupuesto de defensa de Alemania, que ahora se sitúa en el 1,35 por 100 del PIB. Obviamente, un 9,5 por 100 de gasto público sanitario era considerado excesivo para la Comisión Europea, que, por lo tanto, también instó a Alemania a reducirlo. De hecho, en 2019 su gobierno estaba embarcado en plena campaña de cierre de hospitales públicos. Pero cuando llegó la pandemia, esta campaña fue bruscamente interrumpida,

cuestión que es cuidadosamente evitada por todas las fuerzas políticas «europeístas».

Por otro lado, ha proseguido la habitual partida de ping-pong entre «Europa» y sus Estados-nación —posibilitada, y de hecho fomentada, por el diseño institucional de la UE— en la que Bruselas pretende ejercer de capital continental y los Estados le siguen el juego o se desmarcan, dependiendo de cómo sus gobiernos interpreten en cada momento sus intereses propios o los de sus respectivos países. Un ejemplo importante es la política de adquisición de vacunas, que comenzó ya en la primavera de 2020, cuando parecía probable que varias vacunas de diferentes productores estarían ya disponibles para otoño o comienzos del invierno. A escala nacional, varios ministros de Sanidad formaron un consorcio para llevar a cabo negociaciones conjuntas con los potenciales proveedores, justo cuando a Alemania le correspondía ocupar la Presidencia rotativa semestral de la UE. Esta iba a ser la última vez que Angela Merkel presidiera la UE y en su preparación para ello le dijo a su ministro de Sanidad que derivara la cuestión de la adquisición de vacunas a la Comisión Europea. Existen varias teorías para explicar esta inusual decisión, habida cuenta de que la Comisión carecía de experiencia en este tipo de actuaciones e iba a tener que negociar en nombre de veintisiete Estados soberanos, que seguramente albergaban ideas diferentes sobre cuánto querían gastar y en qué tipo de vacunas querían hacerlo. Una explicación de ello es que Merkel temía que, de hacerlo de otra manera, Alemania, la potencia más beneficiada y rica por mor de la unión monetaria, iba a iniciar la vacunación antes que los demás países, lo cual provocaría no pocas discordias entre los Estados miembros precisamente durante su presidencia. En cualquier caso, el resultado fue que las negociaciones se alargaron debido al desacuerdo existente entre los Estados y la Comisión sobre los volúmenes, los precios y las fechas de entrega, así como sobre los lugares de producción y la subvención de las instalaciones de fabricación. En conclusión, los Estados terminaron pagando más y esperando más tiempo por sus vacunas. Un factor adicional fueron las demandas de Francia para que se dejara espacio en la campaña europea de adquisición de vacunas para la que iba a ser producida por la empresa francesa Sanofi. Pero a comienzos de 2021, en el último minuto, Sanofi tuvo que admitir que todos sus esfuerzos habían quedado en agua de borrajas. La Gran Bretaña posterior al Brexit, en cambio, fue capaz de comenzar su campaña de vacunación antes que el resto de países

Europeos y de hacerlo pagando menos, lo que ha sacado los colores a los líderes de la UE, derivando en ocasionales prohibiciones de exportación al Reino Unido de vacunas producidas en el continente.

Como hemos visto, la principal respuesta de la UE a la pandemia ha sido el así llamado, en eurojerga, «Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia NextGenerationEU», abreviado como NGEU (de acuerdo con su acrónimo en inglés), creado por el Consejo Europeo en julio de 2020 y ondeado a los cuatro vientos como expresión de la «solidaridad europea» en tiempos difíciles. En el marco del NGEU, la Unión va a distribuir 750 millardos de euros a precios de 2018 (ahora 807.000 millones ajustados) a lo largo de siete años (de 2021 a 2027) entre sus Estados miembros, para ayudarles a recuperarse de la pandemia y a preparar mejor sus sociedades y economías contra futuros virus. Pero si estudiamos detenidamente este nuevo instrumento, no parece tener mucho que ver en realidad ni con la pandemia ni con la solidaridad europea; de hecho, parece aprovechar la pandemia como una oportunidad para llevar a cabo el antiguo proyecto —básicamente de Francia— de lograr una «fiscalidad europea», originalmente concebido únicamente para la unión monetaria europea. El NGEU, de hecho, va a financiarse mediante el endeudamiento de la UE, eludiendo así los tratados europeos. Para ello, el conjunto de los veintisiete Estados miembros debe embarcarse en esta iniciativa, recibiendo todos y cada uno de ellos una porción del pastel, independientemente de hasta qué punto y cómo se hayan visto afectados por la pandemia. Algo más de la mitad de los fondos va a desembolsarse en forma de ayudas y el resto como préstamos. Las asignaciones correspondientes a cada país están especificadas casi hasta el último dígito, de acuerdo con una fórmula compleja que no es fácil de entender. Italia va a recibir la parte del león, 172,7 millardos, 81,8 de ellos como ayudas; le sigue España con 140,4 millardos (77,3 millardos como ayudas). Curiosamente, en tercera posición aparece Polonia, a pesar de que ha tenido una incidencia de la pandemia muy leve, con 63,8 millardos (37,7 como ayudas). Francia recibe 38,8 millardos y la próspera Alemania 28,8 millardos, para ambos países entregadas como ayudas. Para dotar de perspectiva a estas cifras, solo en 2020 Alemania ha tomado prestado por su cuenta un total de 219 millardos de euros. El reembolso de los 750 millardos, a partir de ahora con cargo al presupuesto ordinario de la UE, debe comenzar en 2028 y terminar treinta años después. Se confía, no obstante, en que para finales de la década de 2020 la UE

haya logrado fuentes de ingresos independientes o, lo que es más probable, que sus Estados miembros le permitan financiar el servicio de su deuda emitiendo deuda nueva, siguiendo su modelo.

La totalidad del dinero del NGEU debe gastarse dentro del plazo de siete años de duración del programa. Los países también deben presentar sus programas presupuestarios ante la Comisión para su aprobación, asignando sus fondos de recuperación y resiliencia básicamente a tres capítulos: la reparación de los daños provocados por la pandemia, logrando que los países sean más resilientes; la transformación verde de sus industrias y estilos de vida en consonancia con el así llamado *European Green Deal* o «Pacto Verde Europeo»; y la «digitalización», con independencia de lo que ello signifique. Adicionalmente, el Parlamento y la Comisión de la UE pretenden condicionar individualmente estos desembolsos a los esfuerzos de cada país miembro en la «desnacionalización» de sus sistemas legales y en la mejora de los derechos LGTBQ. El desembolso de este dinero se está iniciando en otoño de 2021 para algunos países, mientras los planes de gasto de otros siguen esperando la aprobación de la Comisión. En términos generales, y como era previsible, resulta que para invertir todo este dinero en aras de la recuperación y la resiliencia se requiere una planificación experta, una Administración Pública competente y unas capacidades industriales solventes, con las que no se cuenta de un día para otro en todas partes. Por otro lado, en lo que se atañe a los sistemas sanitarios, así como en lo referente a las instituciones educativas y a la Administración Pública en general, no es probable que, dado el daño causado a los mismos por las políticas de austeridad impuesta por la Unión Europea, puedan reconstruirse y modernizarse mediante una simple inyección puntual de fondos, sino que van a necesitar una mejor financiación, dotada de una mayor estabilidad y regularidad. Pero, en última instancia, para lograrlo va a ser necesario abordar las disparidades económicas existentes entre los Estados miembros, especialmente de los países participantes en la unión monetaria.

Por último, la Unión Europea está casi totalmente ausente de la política global en torno a la pandemia, en la misma medida en la que lo están los Estados-nación europeos y la ciudadanía europea. En ocasiones, se ha lamentado que la población europea no esté dispuesta a compartir vacunas con el Sur global, especialmente cuando aún no se disponía de ellas. En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud está instando

a los Gobiernos de Europa y Norteamérica a que no usen sus dosis sobrantes en terceras dosis o en vacunas de refuerzo para sus poblaciones ya vacunadas y que las donen a los países empobrecidos con menores tasas de inmunización. No podemos saber en qué medida esto no es más que retórica de cara a la galería hasta que no conozcamos la capacidad de dichos países para distribuir a sus poblaciones las vacunas donadas. Lo que sí conocemos son los esfuerzos efectuados por la UE y por algunos de sus Estados miembros para lograr que países europeo-orientales, como Hungría, no compren vacunas más económicas, como la rusa o la china, sino que «comprean occidental». Pero carecemos de información sobre hasta qué punto estos esfuerzos han resultado exitosos o sobre cuál ha sido el coste de que los países del Este «no compren oriental».

Ha habido un breve instante en el cual la política global en torno a la pandemia se convirtió en un asunto público: fue a raíz de la controversia surgida entre los países europeos y Estados Unidos sobre los derechos de las patentes de las recién desarrolladas vacunas denominadas de ARN mensajero (ARNm), supuestamente más adecuadas para combatir el coronavirus. Para gran sorpresa de Europa, el supuestamente «eurofilo» nuevo presidente estadounidense, Biden, instó a nuestro continente a renunciar a nuestros derechos de propiedad intelectual sobre estas nuevas vacunas SARS-2 para permitir que los países del Sur las produzcan sin tener que pagar las licencias de las patentes correspondientes. La propuesta era sorprendente, puesto que Estados Unidos posee la mayor industria mundial de investigación, razón por la cual siempre ha sido el más acérrimo promotor de la protección de las patentes. Los europeos, en cambio, que siempre han sido considerados más benévolos respecto a la propiedad intelectual, rápidamente objetaron entre otras cosas que ser capaces de producir algo no supone forzosamente que ello vaya a hacerse realmente de forma masiva, en tanto en cuanto no se posea una industria funcional en términos productivos. Pero el hacha de guerra fue rápidamente enterrada, dejando a la ciudadanía confundida preguntándose qué había realmente detrás de todo esto. Posiblemente, esta controversia se deba al hecho de que las principales patentes en este ámbito están en manos de empresas europeas, como la alemana BioNTech. Si bien estas, muy conscientes de cómo funciona el mundo globalizado, buscaron tempranamente establecer relaciones cooperativas con las grandes corporaciones farmacéuticas estadounidenses (como hizo BioNTech

con Pfizer), puede que no hayan compartido sus patentes con ellas. En cualquier caso, Alemania prefiere compartir vacunas bajo la forma de donaciones caritativas. Mientras tanto, las empresas productoras de vacunas se han convertido en las gallinas de los huevos de oro; la otrora minúscula BioNTech ha pasado a ser ya una de las empresas más capitalizadas de Europa, valorada en 88 millardos de euros, más de la mitad de lo que representan gigantes como Mercedes o Volkswagen, mientras sus propietarios ya han ganado 14 millardos de euros, entrando por la puerta grande en la lista de los diez alemanes más ricos.

Europa no parece estar desempeñando ningún papel en el creciente enfrentamiento entre Estados Unidos y China en torno a la «seguridad sanitaria global», anteriormente denominada «bioseguridad». La punta del iceberg de la misma es la controversia en torno al origen del SARS-CoV-2, en cuyo centro se halla el laboratorio virológico de la ciudad china de Wuhan². Dicho laboratorio parece ser uno de los centros de investigación más avanzados del mundo sobre coronavirus, y fue en Wuhan donde, al parecer, el SARS-CoV-2 contagió a los primeros seres humanos, supuestamente a finales de 2019. Esta coincidencia suscitó muy rápidamente elucubraciones sobre si el nuevo virus no había escapado del mencionado laboratorio, ya fuera por accidente o debido a un sabotaje. El gobierno chino, pero también una gran parte de la comunidad virológica internacional, niega rotundamente semejantes teorías e insiste en que el nuevo virus fue transmitido de forma zoonótica procedente de un animal silvestre —muy probablemente, un murciélago— y que el lugar donde esto ocurrió fue un mercado de animales silvestres (un «mercado mojado») también ubicado en Wuhan. Los esfuerzos por zanjar esta cuestión, liderados por la OMS, han fracasado repetidas veces, supuestamente por una falta de cooperación por parte del gobierno chino.

¿Por qué ello es importante? ¿No debería ser ya agua pasada? Aparte de por las consecuencias cruciales que ello podría tener —como la necesidad de mejorar los protocolos de seguridad de los laboratorios virológicos o bien, en su caso, de regular estrictamente o incluso prohibir el comercio de ciertos animales—, la cuestión se politizó inmediatamente y, a medida que ha ido evolucionando, ha dado determinados

virajes de lo más sorprendentes. El por aquel entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dedicó a echar más leña al fuego, refiriéndose al SARS-CoV-2 como «el virus chino», lo que provocó que China replicara sugiriendo que el virus bien podría haberse escapado de las instalaciones militares estadounidenses de Fort Detrick durante el curso de investigaciones sobre la guerra biológica. Las dos expediciones de eminentes virólogos enviadas a Wuhan bajo los auspicios de la OMS han hallado más plausible la hipótesis del origen natural del virus, pero tampoco han descartado totalmente la hipótesis de un accidente en el laboratorio de la ciudad, en parte porque no han logrado un pleno acceso al mismo. En la actualidad, los participantes en la segunda expedición están pidiendo una nueva investigación, pero con pocas esperanzas de sacar ya nada en claro, debido al deterioro de las posibles evidencias por el paso del tiempo. El sucesor de Trump, Biden, pareció en un primer momento querer olvidar esta cuestión, pero luego cambió de opinión y ordenó una evaluación al respecto a los servicios secretos estadounidenses. Al parecer, la mayoría de las agencias de inteligencia se decantaron por el origen natural del SARS-CoV-2, pero por lo menos una de ellas halló más convincente la teoría del accidente de laboratorio.

Entre tanto, han empezado a ver la luz algunas extrañas conexiones paralelas. Como han informado algunos blogueros periodistas, resulta que el laboratorio de Wuhan sería uno de los principales focos de la investigación virológica internacional, dirigido por científicos chinos formados en Estados Unidos y en parte financiado por subvenciones del National Institutes of Health, un organismo del Gobierno estadounidense, así como por empresas y fundaciones también estadounidenses. Algunos de dichos fondos habrían sido canalizados a través de un centro de investigación con sede en Nueva York, cuyo director mantendría una estrecha colaboración con el laboratorio de Wuhan, y que posteriormente participó en los dos equipos de investigación enviados a Wuhan por la OMS. También fue una de las personas que firmó (y probablemente también el principal promotor de) una carta abierta publicada en *The Lancet* pocos días después de la aparición de la COVID-19 en la cual un grupo de renombrados virólogos negaban categóricamente que el nuevo virus hubiera podido surgir del laboratorio de Wuhan, calificando dicha hipótesis de «teoría de la conspiración»³.

2. Sobre esta cuestión véase, entre otros, Nicholas Wade, «What's the Origin of COVID? Did People or Nature Open Pandora's Box at Wuhan?», *Bulletin of the Atomic Scientists*, 5 de mayo de 2021, <https://bit.ly/3ukboL5>, consultado por última vez el 21 de septiembre de 2021.

3. *The Lancet*, vol. 395, 7 de marzo de 2020.

El uso de esta expresión en semejante contexto debería haber llamado la atención del periodismo de investigación. ¿Por qué no hablar mejor de la «teoría del accidente de laboratorio», pues de lo que se estaba comenzando a hablar entonces era de la posibilidad de que se tratara de un accidente, no de ninguna conspiración, de la cual no había hablado nadie en los momentos iniciales? Resulta pertinente comentar en este contexto que la expresión «teoría de la conspiración» ha desempeñado un papel prominente en una serie de ejercicios internacionales que al parecer se iniciaron en la década de 1980 con el fin de prepararse para el estallido de una pandemia, primero en el curso de una posible guerra biológica internacional y después como resultado de un ataque terrorista⁴. Organizados por Estados Unidos, estos ejercicios reunieron a diversos gobiernos, organismos internacionales como la OMS —aunque, al parecer, no han contado con la presencia de la Unión Europea—, multinacionales farmacéuticas, fundaciones, organismos militares y de inteligencia, empresas de relaciones públicas y medios de comunicación. Una de las cuestiones ahí abordadas fue cómo comunicar con la población durante la pandemia a fin de que aceptara lo que se consideraba necesario para detener los contagios, por ejemplo, respetar las medidas de cuarentena, vacunarse o confiar en sus dirigentes, en su competencia y en sus declaraciones. En este contexto también se habló sobre cómo gestionar las «teorías de la conspiración» contrarias a las informaciones verdaderas o estratégicas difundidas por los Gobiernos.

Y es bastante probable que en los países democráticos muchos periodistas se hayan abstenido, por temor a ser tildados de «teóricos de la conspiración» y tal vez ser excluidos de las fuentes de información oficiales, de llevar a cabo investigaciones

4. Desafortunadamente, la fuente más interesante que he hallado al respecto solo está disponible en alemán: Paul Schreyer, *Chronik einer angekündigten Krise: Wie ein Virus die Welt verändern konnte*, Frankfurt, 2020.

Nadie en su sano juicio ha sugerido que la aparición del nuevo virus a finales de 2019 (si es que apareció realmente entonces y no algunas semanas antes, como afirman algunas fuentes) fuera nada parecido a un experimento en vivo llevado a cabo con la población de todo el planeta por iniciativa del *establishment* mundial, inmediatamente después de la conferencia celebrada en el Hotel Pierre. Sin embargo, lo que en todo caso demuestra la secuencia de los acontecimientos es que el SARS-CoV-2 no llegó de forma inesperada.

independientes o, incluso, de informar siquiera sobre lo que está ocurriendo entre bambalinas en la política internacional en relación con la presente pandemia, limitándose pues a informar sobre las políticas públicas. Lo que se mueve entre bambalinas es una amplia red de organizaciones, globales y nacionales, públicas y privadas, dedicadas a gestionar la amenaza de (y, en realidad, preparándose para) la guerra biológica; un complejo científico militar industrial en torno a la

bioseguridad en ciertos aspectos tan estrechamente interconectado con el complejo médico industrial que se han convertido en uno (relación que recientemente ha llevado a la sustitución del término «bioseguridad» por otro menos alarmante: «seguridad sanitaria»). Se conoce muy poco de este complejo, excepto que está dirigido por Estados Unidos, que cuenta con la profunda implicación de sus servicios de inteligencia y que incluye, entre otros miembros, a organizaciones como la OMS (famelica de fondos) y a conspicuos representantes de las grandes empresas farmacéuticas (rebosantes de recursos). Lo que sí sabemos sobre esta red es que ha celebrado varios encuentros en las últimas dos décadas para poner a punto la cooperación internacional y público-privada ante futuras emergencias. En retrospectiva, el más llamativo de estos eventos fue el celebrado en el Hotel Pierre de Nueva York el 18 de octubre de 2019 bajo el lema *Event 201*, el cual versó sobre el ensayo de la

eventual repuesta al estallido de una posible pandemia global provocada por un coronavirus del tipo SARS, después de haber efectuado ejercicios previos similares con la viruela, la peste, el carbunco y el SARS-Cov-1. Tan solo unas pocas semanas después del mismo irrumpió en escena el SARS-CoV-2.

Nadie en su sano juicio ha sugerido que la aparición del nuevo virus a finales de 2019 (si es que apareció realmente entonces y no algunas semanas antes, como afirman algunas fuentes) fuera nada parecido a un experimento en vivo llevado a cabo con la población de todo el planeta por iniciativa del *establishment* mundial, inmediatamente después de la conferencia celebrada en el Hotel Pierre. Sin embargo, lo que

en todo caso demuestra la secuencia de los acontecimientos es que el SARS-CoV-2 no llegó de forma inesperada. En cuanto apareció, su estructura básica ya era muy conocida, puesto que se hallaba precedida por una amplia investigación científica de alto nivel, lo cual podría explicar incidentalmente cómo es posible que se haya logrado desarrollar un nuevo tipo de vacuna —de ARNm, en apariencia prácticamente hecha a medida para este nuevo tipo de virus— en un plazo de tiempo verdaderamente récord. Pero aún resulta más interesante, no obstante, analizar cómo la investigación virológica —a la que también se dedica el laboratorio de Wuhan— parece estar muy relacionada con los preparativos internacionales tanto para defenderse de la guerra biológica como, muy específicamente, para librarla. Estos vínculos se antojan muy similares a los que durante la Guerra Fría mantuvo la física nuclear con la necesidad tanto de prepararse para la guerra nuclear como también de defenderse de la misma. Dados los riesgos que implica la investigación en bioseguridad, que indudablemente no son menores que los riesgos asociados a la industria y la guerra nucleares, parece esencial que el conjunto de la ciudadanía tenga un mayor conocimiento sobre las políticas globales en torno al SARS-CoV-2, algo de lo que sin embargo prácticamente nunca se discute en Europa.

En resumidas cuentas, esta red global de bioseguridad, que parece estar patrocinando una buena parte de la investigación virológica actual más avanzada, tendría su origen en una convención internacional sobre armas biológicas aprobada por la Asamblea de la ONU en 1971, que prohíbe de hecho no solo la guerra biológica, sino también toda investigación relacionada con su preparación⁵. Sí permite, en cambio, la investigación dirigida a defenderse contra posibles armas biológicas, lo que, comprensiblemente, requiere un profundo conocimiento sobre las propiedades de dichas armas. Solo los especialistas pueden saber hasta qué punto ello deja la puerta abierta a la investigación sobre nuevas armas biológicas y cómo esto a su vez se relaciona con la investigación virológica con fines médicos: parece que nos enfrentamos aquí a más de un problema de posibles «dobles usos». De lo que no cabe duda es que especialmente Estados Unidos mantiene grandes centros de investigación

5. El título completo es *Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y tóxicas y sobre su destrucción*. Desde 1969, Estados Unidos, tras una serie de sucesos que acabaron saliendo a la luz pública, prohibió la investiga-

en bioseguridad bajo control militar, por ejemplo, en Fort Derrick, donde, desde el estallido de la pandemia del SARS-CoV-1, responsable de la famosa gripe aviaria, los coronavirus parecen hallarse en lo más alto de la agenda de trabajo. La importancia que Estados Unidos concede a la defensa contra este tipo de virus, ya sean de origen natural o de laboratorio, puede constatar en el hecho de que el mencionado encuentro de octubre de 2019 en el Hotel Pierre fue presidido por la exsecretaria de Estado Madeleine Albright, en calidad de representante nada menos que del mismísimo presidente de Estados Unidos. También acudió, entre muchas otras personalidades, Avril Haynes, exvicedirectora de la CIA y exviceconsejera de Seguridad Nacional con Obama, quien, en el momento de estos «juegos de guerra» desarrollados en el Hotel Pierre, trabajaba para un *lobby* de Washington, ofreciéndole contactos con el Pentágono y con los servicios secretos estadounidenses. Pocos meses después del *Event 201*, fue nombrada por el presidente Biden directora de la Inteligencia Nacional, el máximo puesto del *establishment* de los servicios de inteligencia estadounidenses, que confiere la responsabilidad de la supervisión y coordinación de un amplio número de agencias responsables de los mismos.

Las políticas de defensa, en el marco de los tratados internacionales sobre control armamentístico, pueden acabar emparejando a extraños compañeros de cama, lo cual parece estar sucediendo respecto a la guerra biológica. Dado lo que conocemos del paradójico mundo de la disuasión mutua —consistente en dejar que tu adversario conozca únicamente una parte de lo que posee, mientras ocultas la parte decisiva del resto, y donde la legislación internacional coexiste con legislaciones nacionales divergentes, de manera que algo puede estar prohibido en un país pero no en otro—, no resulta en absoluto inconcebible que potencias eventualmente enfrentadas entre sí acaben cooperando en ámbitos como la investigación científica, compartiendo observaciones y engañándose simultáneamente. Un ámbito que puede prestarse en gran medida en tal modelo puede ser la denominada «investigación de ganancia de función», consistente en aprender a modificar genéticamente un virus para hacerlo más contagioso y mortal. Es cierto que para defenderse de posibles ataques biológicos puede resultar legítimo desear conocer cómo la tecnología de ganancia de función puede intensificar el impacto

ción en armas biológicas en todo su territorio, en la medida en que dichas investigaciones podían provocar daños a la población civil.

de un virus. Pero si la investigación en esta línea resulta ser ilegal en un primer país pero no en un segundo país, el ejército del primer país podría estar muy interesado en poder investigar en el segundo país, siempre y cuando exista un compromiso mutuo de poner en común los resultados. Evidentemente, son situaciones propicias para todo tipo de jugadas a lo James Bond, ¿y quién puede descartar que existan actores tanto en Estados Unidos como en China, tanto en el ámbito de la ciencia como en el militar, que estén deseosos de cooperar de esta u otras formas similares?

En semejante contexto, resulta interesante señalar que inmediatamente después de la publicación de los resultados de la secuenciación genética del SARS-CoV-2, un determinado número de prominentes virólogos, la mayoría jubilados, hicieron saber que, en su opinión, resultaba muy improbable que el nuevo tipo de coronavirus hubiera evolucionado por sí mismo, por lo que solo podría tratarse de un producto de ingeniería biotecnológica. Pero más interesante aún resultan las nerviosas reacciones ante estas afirmaciones por parte del *establishment* virológico, así como su profuso uso y abuso del susodicho concepto de «teoría de la conspiración». Una y otra vez se ha dicho a la ciudadanía que el SARS-CoV-2 es indiscutiblemente el resultado de la evolución natural, exonerando así tanto al personal científico chino como a sus colegas estadounidenses, y a los patrocinadores de ambos, de cualquier violación de la convención sobre armas biológicas. Entre los defensores más vociferantes de esta postura se cuenta el jefe de virología del Gobierno alemán, Christian Drosten, que es además un frecuente visitante de Wuhan, tanto de su laboratorio como de su mercado mojado, como él mismo ha reconocido. Para refutar la conjetura de la investigación de ganancia de función, Drosten ha argumentado que el nuevo virus es mucho más complejo de lo estrictamente necesario para resultar más peligroso para los seres humanos, lo que, en su opinión, es una prueba de que la modificación en cuestión tiene que ser producto de la evolución natural y no de la manipulación humana. Haciendo gala de no poca

soberbia profesional, Drosten ha llegado a decir a un entrevistador que, si él hubiera tenido que modificar el virus, lo hubiera hecho de una manera mucho más sencilla y elegante⁶.

Visto desde esta perspectiva, no es de extrañar que el tema, a primera vista un tanto secundario, del origen del virus y del papel del laboratorio de Wuhan en su creación siga estando de rabiosa actualidad. En paralelo a los esfuerzos por silenciar este debate,

Los ciudadanos y ciudadanas deben saber qué tipo de «defensas» están diseñando las grandes potencias y cuán destructivas pueden llegar a ser. La «bioseguridad» no puede seguir siendo un secreto de Estado, y si las poblaciones europeas pretenden desarrollar una mayor «resiliencia» frente a nuevos tipos de coronavirus, los preparativos que se están desarrollando para librar y defenderse de la guerra biológica deberían convertirse en uno de los grandes asuntos de la agenda de debate público.

la cuestión de si el SARS-CoV-2 procede de una cueva de murciélagos o de una probeta ha sido el objeto de varias investigaciones internacionales, todas frustradas, que, visto lo explosivo que puede resultar el tema, bien pueden haber sido diseñadas para quedar inconclusas. En cualquier caso, todo esto apela a la necesidad de iniciar un vivo debate público, por un lado, sobre cómo las grandes potencias mundiales —y, sobre todo, la potencia mundial por excelencia, Estados Unidos— se están preparando tanto para hacer la guerra biológica como para defenderse de ella, siendo ambas opciones igual de peligrosas, además de difíciles de separar, y, por otro, sobre cómo la investigación médico-biológica pacífica y la investigación biológica militar se hallan estrechamente vinculadas en la primera línea del frente de la virología. Los ciudadanos y ciudadanas deben saber qué tipo de «defensas» están diseñando las grandes

potencias y cuán destructivas pueden llegar a ser. La «bioseguridad» no puede seguir siendo un secreto de Estado, y si las poblaciones europeas pretenden desarrollar una mayor «resiliencia» frente a nuevos tipos de coronavirus, los preparativos que se están desarrollando para librar y defenderse de la guerra biológica deberían convertirse en uno de los grandes asuntos de la agenda de debate público. ■

6. «Herr Drosten, woher kam dieses Virus?», *Republik*, 5 de junio de 2021, <https://bit.ly/3mmH2Eb>, consultado por última vez el 21 de septiembre de 2021.